



GD-F-008 V.9

Página 1 de 8

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20154010018145 DEL 06/07/2015

“Por la cual se rechaza una solicitud de revocatoria directa”

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el del Decreto 1484 de 2014 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 5° del Decreto 1484 de 2014, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007.”*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1484 de 2014; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de SANTA LUCÍA, del departamento del ATLÁNTICO, es de categoría 6 y se determinó que no fue prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2013, por lo que para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 6° del Decreto 1484 de 2014.

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010063595, del 23 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Servicios Públicos resolvió DESCERTIFICAR al municipio de SANTA LUCÍA, del departamento del ATLÁNTICO, por no haber cumplido los siguientes requisitos establecidos en el artículo 6° del decreto 1484 de 2014:

1) Reporte al SUI de la suscripción de los contratos en la zona urbana a que se refiere el artículo 99.8 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 11 del Decreto número 565 de 1996 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, o alguno de los siguientes documentos que soporten:

a) Giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo;



¹ El Decreto 1484 de 2014 fue derogado por el Decreto 1077 de 2015, sin embargo, se hará mención es éste acto administrativo, al Decreto 1484 por ser la norma que rigió el proceso de certificación para la administración de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2013.



- b) Giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del esquema fiduciario constituido en el marco del PAP – PDA;
- c) Certificación emitida por el prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en donde certifique el monto del giro de los recursos destinados al pago de los subsidios en la respectiva vigencia;
- d) Reporte al FUT en la categoría de gastos inversión el compromiso de subsidios.

2) Reporte al SUI del Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya.

En caso de no poder acreditar el requisito de la forma descrita, podía:

- a) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar, o,
- b) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar.

Que revisado el Sistema de Gestión Documental ORFEO de esta entidad, se encontró que la Alcaldía de Santa Lucía presentó recurso de reposición en término, en contra de la decisión de descertificar al municipio mediante documentación radicada en esta entidad con el No. SSPD 20155290049012 del 4 de febrero de 2015.

Que el recurso de reposición presentado por la Alcaldía Municipal fue tramitado con la Resolución No. SSPD 20154010007135 del 27 de marzo de 2015, la cual determinó que la Alcaldía de Santa Lucía, acreditó la aplicación de la metodología nacional para asegurar el equilibrio entre subsidios y contribuciones, y a su vez reiteró el incumplimiento de los requisitos para acreditar el funcionamiento del FSRI, por lo cual se decidió confirmar la Resolución que descertificó al municipio de Santa Lucía.

Que el señor TEODOMIRO ARIZA MEDINA, en su calidad de alcalde del municipio de Santa Lucía, mediante radicado número SSPD 20155290229272 del 25 de abril de 2015, presentó ante este despacho una solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. SSPD 20154010007135 del 27 de marzo de 2015, expedida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, basado en los argumentos que se señalan a continuación:

"TEODOMIRO ARIZA MEDINA, en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de Santa Lucía Atlántico, con mi acostumbrado respeto y con fundamentos en el Artículo 23 y 29 Constitucional y demás normas concordantes en especial aquellas que se refieren a la revocatoria directa de los actos administrativos que se emiten o expiden con violación a los Principios Consagrados en la Constitución Nacional pido a su despacho que se suspenda la decisión tomada el 27 de marzo del 2015 mediante resolución No. SSPD 20154010007135, en la cual se resolvió lo siguiente:

"ARTICULO PRIMERO CORREGIR la Resolución No. SSPD 20144010063595, del 23 de diciembre de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en el sentido de señalar que el municipio de SANTA LUCIA no cumplió los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto 1484 de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20144010063595 del 23 de diciembre de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución."

En relación a esta situación, es claro que al Artículo 1 corrige la Resolución No. SSPD 20144010063595 objeto de Recurso de Reposición, por tanto en aras de garantizar el Debido Proceso, debió proceder la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a inicialmente corregir la Resolución, que presenta los errores de forma y fondo y posteriormente dar traslado al Municipio de Santa Lucía para que ejerciera su Legítima Defensa con un pronunciamiento de esta entidad que no estuviera Viciado como se explica en el Artículo Primero de la Resolución que se pide se revoque.

Es inocuo el Recurso de Reposición presentado y el cual se resuelve el 27 de marzo del 2015 porque el contenido de lo atacado tenía falencias y vicios que le revestían de Nulidad, si bien no es absoluta si es relativa y afecta los intereses del Municipio, más aun si se está sobre el Decreto 1484 que tiene vigencia del 06 de Agosto del 2014 y revoca todas las Normas anteriores.

Las certificaciones del Personero que son del 2013 y la del Alcalde Municipal, igualmente revisten la Calidad de erradas, porque revisando las condiciones del Municipio solo a partir del año 2011 posterior a la inundación, se adecuan algunas obras del sistema de alcantarillado por parte del Fondo de Adaptación y Calamidad Pública las cuales no han sido entregadas al Municipio, por lo que pido se haga

una inspección directa por esta entidad para evitar la descertificación del Municipio de Santa Lucía por una información mal obtenida o mal ejecutada.

Proceder como lo establece el numeral segundo de la parte Resolutiva en descertificar el Municipio es atentar contra una Población que no tiene ingresos diferentes a los enviados a través del Sistema General de Participaciones y se correría el riesgo de incurrir en la Causal Segunda de Revocatoria Directa que hace referencia al Perjuicio que se genera con este acto administrativo el cual es violatorio del Interés Público y Social, además de afectar la Constitución y la Ley."

2. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DIRECTA

La figura jurídica de la revocatoria directa, consiste en la potestad legal atribuida a la administración en cabeza del funcionario que profirió el acto o en su defecto a su superior jerárquico, de oficio o a petición de parte, para que suprima de la vida jurídica, una decisión administrativa contraria a la Constitución Nacional o a la ley, al interés público o social, o cuando cause un agravio injustificado a una persona, causales previstas en el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011: "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" (C.P.A.C.A.).

"ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."*

En este orden de ideas, es claro que la figura jurídica de la revocatoria directa de los actos administrativos instituida en los artículos 93 y s.s. del C.P.A.C.A., es un mecanismo de control de legalidad tendiente a excluir del ordenamiento aquellas decisiones administrativas que adolezcan de alguna de las causales antes reseñadas.

En primer lugar se pudo establecer que la solicitud de revocatoria, fue presentada sin la firma del señor Teodomiro Ariza Medina. Por ello mediante radicado No. SSPD 20154010288901 del 25 de mayo, se solicitó al alcalde municipal, presentar el documento firmado, sin embargo verificada la guía RN372374178CO asignada a este radicado por la empresa de correos 4 -72, se pudo determinar que el documento se encuentra en estado de devolución al remitente. Con miras a garantizar los principios de celeridad y eficiencia, y dar pronta respuesta a su solicitud, se procede a analizar y responder los argumentos de la solicitud de revocatoria directa, que se pueden resumir en los siguientes términos:

a) Con la expedición de la Resolución No. SSPD 20154010007135 del 27 de marzo de 2015, la Superintendencia debió conceder una nueva oportunidad al municipio de ejercer su legítima defensa, porque la Resolución inicialmente expedida por esta entidad contenía falencias y vicios que conducen a su nulidad.

b) Solicita que se realice una inspección al municipio para verificar el estado del mismo, y afirma que las certificaciones remitidas por el personero y el alcalde municipal son erradas.

c) Señala que la descertificación atenta contra la población del municipio porque no tendría los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones.

Se procede a dar respuesta a cada uno de los planteamientos del solicitante en el orden planteado:

a) La Resolución No. SSPD 20144010063595 de 2014 tenía un error de digitación que fue subsanado en la Resolución que resolvió el recurso de reposición con el radicado No. SSPD 20154010007135 del 27 de marzo de 2015. Adicionalmente la modificación que se realizó a la Resolución No. SSPD 20144010063595 fue estrictamente formal, no incidió en el análisis de los requisitos, ni en la parte resolutoria de la Resolución, por lo cual no daba lugar a que el municipio presentara nuevos argumentos.

Por otra parte, en el acto de notificación personal de la Resolución No. SSPD 20144010063595 de 2014, se puso de presente al alcalde que el único recurso que admitía este acto administrativo era el recurso de reposición, el cual fue oportunamente presentado por parte del municipio, y resuelto de fondo por esta entidad.

Así mismo se aclara que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo es competencia exclusiva de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de los medios de control previstos en los artículos 135 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

b) En cuanto a la solicitud de inspeccionar el estado del municipio, la Superintendencia considera que los elementos documentales que reposan en el expediente del municipio, gozan de la claridad suficiente

para considerar innecesario decretar una prueba de esta naturaleza, y adicionalmente este requerimiento no fue presentado con el recurso de reposición.

Por otra parte, el recurrente manifiesta que: "Las certificaciones del personero que son del 2013 y la del alcalde municipal, igualmente revisten la Calidad de erradas, porque revisadas las condiciones del municipio solo a partir del año 2011 posterior a la inundación, se adecuan algunas obras del sistema de alcantarillado por parte del Fondo de Adaptación y Calamidad Pública las cuales no han sido entregadas al Municipio". Sin embargo esta afirmación contradice lo señalado con el documento presentado por el alcalde municipal con el radicado No. SSPD 20145290702872 del 22 de diciembre de 2014:

Cordial saludo,

Respondiendo a su oficio de fecha diciembre 9 de 2014, donde cita oficio de la Superintendencia de Servicios Públicos, referente a comunicación del Auto de Prueba N° SSPD 20144010020106 del 24 de noviembre de 2014, donde se ordena la práctica de prueba dentro del proceso de certificación para la administración de recursos SGP-APSB.

Como es de conocimiento público la tragedia sufrida por el sur del Departamento del Atlántico el 30 de noviembre de 2010 y como también es sabido que el perímetro urbano de nuestro municipio fue inundado por las aguas desbordadas del Canal del Dique, le manifiesto que toda la infraestructura del sistema de alcantarillado quedó colapsada, sin embargo con todo el esfuerzo hecho por el Departamento y el Municipio se recuperó en gran parte el sistema y poco a poco entramos en funcionamiento a finales del 2012.

En la vigencia 2013 si fue prestado el servicio de alcantarillado por el Municipio de Santa Lucía a pesar de todos los inconvenientes: se hizo mediante personal contratado por OPS.

Debido a la inundación presentada y la asonada del 31 de octubre de 2011, los archivos y muebles de la alcaldía fueron destruidos en su totalidad.

Por último, el Gobierno Nacional por intermedio del FONDO DE ADAPTACION está interviniendo las redes de alcantarillado en nuestro Municipio, obra que no ha sido recibida por la administración para así proceder a entregarla a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Lucía.

Atentamente

TEODOMIRO AFIZA MEDINA
Alcalde

En este texto el alcalde señala que "En la vigencia 2013, si fue prestado el servicio de alcantarillado por el Municipio de Santa Lucía (...)" -negrilla fuera de texto- y con base en ello se reitera el análisis realizado en las Resoluciones Nos. SSPD 20144010063595 de 2014 y 20154010007135 del 27 de marzo de 2015, en cuanto a la calidad de prestador del municipio de Santa Lucía a 31 de diciembre de 2013, como municipio prestador directo del servicio de alcantarillado.

Adicionalmente resulta aplicable la teoría del respeto por los actos propios, en virtud de la cual, las autoridades no pueden desconocer determinaciones adoptadas por ellas mismas, frente a una misma situación, tal como lo desarrolla la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

"Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (art. 83 C.N). Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisibles toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto.

La teoría del respeto del acto propio, tiene origen en el brocardo "Venire contra pactum proprium nell conceditur" y, su fundamento radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.

El tratadista y Magistrado del Tribunal Constitucional Español Luis Díaz Picazo enseña que la prohibición no impone la obligación de no hacer sino, más bien, impone un deber de no poder hacer; por ello es que se dice "no se puede ir contra los actos propios".

Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho."

La mencionada sentencia dice que el respeto del acto propio requiere de tres condiciones para que pueda ser aplicado: a. Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz. b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción –atentatorio de la buena fe- existente entre ambas conductas. c. La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas.²

Por lo anterior no es admisible que la Alcaldía municipal modifique a su arbitrio la constancia sobre el estado de la prestación del servicio público de alcantarillado en su municipio.

c) Finalmente la Alcaldía señala que con la medida de descertificación se atenta contra la población del municipio, y por ello es violatorio del interés público y social.

Por lo anterior la Superintendencia procede a analizar el alcance y contenido de los conceptos de interés público e interés social para efectos de determinar si las Resoluciones que descertificaron al municipio de Santa Lucía, no esta conforme a ellos, o atenten en su contra.

En primer lugar es necesario señalar que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el interés público como: “un concepto que conlleva atender el interés general o el bien común, y no sólo tener en cuenta consideraciones de interés patrimonial”.³

A su vez ha señalado lo siguiente respecto de la noción de interés social:

“Es necesario aclarar, antes de entrar propiamente en la materia objeto de la presente Sentencia que, si bien el demandante los utiliza de manera indistinta, los términos “interés general” e “interés social” tienen connotaciones diferentes dentro del ámbito del derecho constitucional colombiano. En la reforma constitucional de 1936 se estableció una distinción entre interés general y social y se optó por incluir los dos conceptos como condicionamientos de los derechos de los particulares, en especial, sobre el derecho de propiedad privada.

El concepto de interés general es una cláusula más indeterminada cuyo contenido ha de hacerse explícito en cada caso concreto. Entre tanto, el de “interés social”, que la Constitución actual emplea en sus artículos 51, 58, 62, 333 y 365, es una concreción del interés general que se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho (art. 1º). En tal medida, el apelativo de social le imprime una finalidad y un límite a la actividad estatal, determinando, específicamente, las condiciones dentro de las cuales los intereses económicos particulares son susceptibles de protección. Así, este conjunto de garantías que otorga el Estado implican, a su vez, una necesaria intervención social de su parte, que tiene como finalidad inmediata y directa y como límite constitucionalmente exigibles, el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. En particular, de las menos favorecidas.”

En este contexto la Superintendencia encuentra que el interés público, y el interés social, en términos de la Corte Constitucional, están directamente relacionados con la protección de los derechos fundamentales, la tutela del interés general, y la intervención del estado para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.

Adicionalmente, la Superintendencia pudo determinar que las Resoluciones por las cuales se descertificó al municipio de Santa Lucía, fueron expedidas con sujeción a la Constitución y a la Ley, puesto que fueron debidamente motivadas, se expidieron con sujeción al debido proceso y al derecho de defensa, y en cada una de ellas se analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1484 de 2014.

En materia de servicios públicos la Corte Constitucional ha precisado el impacto de su prestación en los derechos fundamentales de las personas:

“El Constituyente de 1991 concibió la prestación de los servicios públicos como una función inherente a los fines del Estado Social de Derecho (CP, Artículo 365), con el deber correlativo de una realización eficiente para todos los integrantes del territorio nacional, dada la estrecha vinculación que los mismos mantienen con la satisfacción de derechos fundamentales de las personas, con la vida y la salud. Dicha prestación debe adelantarse bajo un régimen jurídico determinado por el legislador (CP, Artículo 150-23) acorde con las necesidades de la comunidad y dentro de nueva perceptiva expansionista del ámbito tradicionalmente estatal de ejecución de actividades que comprenden servicios públicos, permitiendo la participación de las comunidades organizadas y de los particulares” Subrayado fuera de texto

² Corte Constitucional. Sentencia T- 295/99

³ Sentencia T-517 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra

⁴ Sentencia C-247 de 1997, MP: Hernando Herrera Vergara

Así mismo, resulta pertinente remitirnos al artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, que establece respecto del proceso de certificación:

“ Parágrafo. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será la entidad competente para adelantar el proceso de certificación o retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios en el aseguramiento de la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.”

El Decreto 1484 de 2014 establece que la descertificación por el incumplimiento de los requisitos allí señalados, conduce a que las gobernaciones asuman de manera temporal las competencias para administrar estos recursos, con el fin de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios:

“Asunción Temporal de Competencias. Es una medida correctiva diseñada como uno de los mecanismos de control al manejo de recursos del SGP, por medio de la cual la competencia para asegurar la prestación del servicio la asume temporalmente el departamento, y en el caso de los departamentos o distritos, la Nación, de acuerdo con las disposiciones establecidas en los Decretos 028 y 2911 de 2008, el Decreto 2613 de 2009 y/o las normas que los sustituyan, modifiquen o adicionen.” Subrayado fuera de texto

Con base en estas disposiciones se puede establecer que el proceso de certificación tiene como propósito asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios en los municipios y distritos del país a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 1484 de 2014, el cual a su vez es uno de los fines esenciales del estado según lo señala la jurisprudencia previamente citada.

Como resultado de lo anterior, la descertificación de un municipio constituye una medida administrativa en virtud de la cual, el manejo de los recursos provenientes del SGP -APSB, es asumida de manera temporal por el departamento respectivo. A su vez, la normativa le impone al departamento la obligación de ejecutar los recursos con el propósito de garantizar la prestación de los servicios públicos.

El artículo 9° del Decreto 1484 de 2014 dispuso lo siguiente:

“Los departamentos deberán asegurar la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la jurisdicción de los municipios o distritos descertificados, para lo cual ejercerán las atribuciones específicas que a continuación se describen:

15.1. Apoyar técnica y administrativamente al municipio o distrito descertificado y a los prestadores del servicio, para lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan para que los municipios y distritos sean certificados nuevamente.

15.2. Trasladar y pagar los recursos necesarios para cubrir el requerimiento de subsidios, siempre y cuando se haya adelantado el procedimiento del artículo 2° del Decreto 1013 de 2005 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

15.3 Respecto de los prestadores de servicios públicos diferentes al municipio o distrito que presten los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo en el municipio o distrito descertificado:

15.3.1 Representar al municipio o distrito descertificado frente a los prestadores, sin perjuicio de que el municipio participe con voz, pero sin voto.

15.3.2 Suscribir con los prestadores correspondientes, el convenio o contrato para el otorgamiento de subsidios de que trata el artículo 11 del Decreto 565 de 1996 o la norma que lo modifique, complementen o sustituya con cargo al SGP-ASPB del municipio o distrito descertificado.

15.3.3 Suscribir con los prestadores los contratos, prórrogas, adiciones y modificaciones necesarias para asegurar la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

15.3.4. Otorgar al prestador el derecho a utilizar la infraestructura pública existente en el municipio o distrito, previa realización del proceso de selección a que se refiere la Ley 142 de 1994.

15.4 Respecto del municipio prestador directo de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo:

15.4.1. Adelantar lo previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994 en caso de que no se haya agotado.

15.4.2. Efectuar seguimiento a la prestación de los mencionados servicios, e impartir instrucciones con el fin de mejorar la prestación de los servicios en el marco de las disposiciones legales vigentes, que deberán ser atendidas por los funcionarios o contratistas del municipio o distrito descertificado.

Parágrafo 1°. Para garantizar la continuidad de los servicios prestados directamente por el municipio o distrito descertificado, estos seguirán prestándose bajo la instrucción del departamento, en el marco de las disposiciones legales vigentes, hasta tanto se vincule a un nuevo prestador. El departamento efectuará el seguimiento a la prestación de los servicios prestados directamente por el municipio o distrito, e impartirá instrucciones, las cuales deberán ser atendidas por estos: "

En este contexto se puede concluir que el proceso de certificación está desarrollado dentro del esquema de la Constitución Política en materia de servicios públicos, en donde el estado debe garantizar la prestación eficiente de los mismos. Para estos efectos, la entidad considera que el orden público y social se garantiza en la medida en que ya sea el municipio que se encuentre certificado, o el departamento mediante la asunción temporal de competencias, deben cumplir la obligación constitucional y legal de garantizar la prestación de los servicios públicos a través de la ejecución de los recursos destinados a ello.

Finalmente se reitera el carácter excepcional que reviste la figura de la revocatoria directa, que ha sido desarrollado por la jurisprudencia en los siguientes términos:

"Procedencia excepcional de la revocatoria directa de acto administrativo de carácter subjetivo.

Es bien sabido que uno de los elementos definidores de la relación entre la Administración y los administrados es el de la confianza, por parte de éstos últimos, en que ella despliega su actuar dentro de un marco respetuoso de la seguridad jurídica. Y ello debe ser así como que ésta es un valor fundante del Estado de derecho, al punto que llega a confundirse con éste, como que se constituye en el esfuerzo más acabado de los hombres por racionalizar el ejercicio del poder a través del imperio de la ley.

Con esa perspectiva el legislador dispuso que la revocatoria directa, esto es el retiro del mundo jurídico de un acto administrativo, cuando éste es de carácter particular y concreto, no puede hacerse desconociendo los derechos adquiridos. Así lo dispone claramente el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo conforme al cual no se podrá hacer "sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular". Sin embargo añade que "Pero habrá lugar a la revocación de estos actos...si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales". Esta normativa ha de interpretarse en armonía con lo dispuesto por el artículo 588 Superior que garantiza "los derechos adquiridos con arreglo a las leyes" (subrayas fuera de texto).

En tal virtud, en forma reiterada la jurisprudencia de esta Corte con apoyo en las normas citadas y en la interpretación dada por el Consejo de Estado a las mismas, ha dejado en claro que si bien es cierto que las más de las veces ha de mediar el consentimiento del particular afectado en orden a proceder a revocar un acto por cuya virtud se ha creado una situación jurídica de carácter particular y concreto, no es menos cierto que una de las dos hipótesis excepcionales en que es viable ello es justamente cuando se trata de actuaciones ilegales y fraudulentas que han precipitado una decisión de la administración sin apoyo en un justo título".⁵

Como consecuencia de lo anterior, se pudo determinar que no se configura la causal de revocatoria presentada por el alcalde municipal de Santa Lucía, y se reitera la firmeza de la descertificación en la administración de los recursos del SGP – APSB de vigencia 2013.

Por lo expuesto este despacho,

RESUELVE:

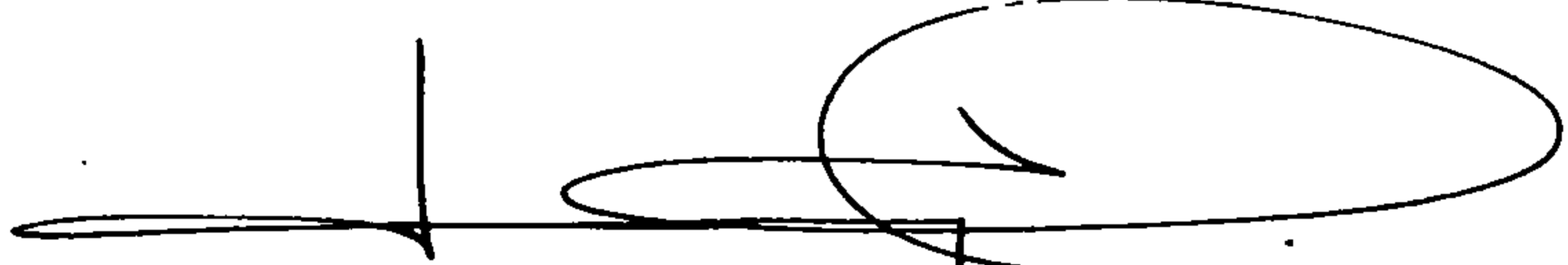
ARTÍCULO PRIMERO.- NO ACCEDER a la solicitud de revocatoria directa de las Resolución No. 20154010007135 del 27 de marzo de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de SANTA LUCÍA, del departamento de ATLÁNTICO, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).





⁵ Corte Constitucional. Sentencia T-436/98

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Juan Leonardo Álvarez Arévalo - Contratista Grupo de Certificaciones e Información 
Revisó: Vanessa Benavides Quevedo - Contratista Grupo de Certificaciones e Información 
Aprobó: Irina Margarita Amín David - Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información 
Visto Bueno: Edgardo Torres - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
Expediente: 20094011303080159A